

NACIONES UNIDAS

Asamblea General

QUINCUAGÉSIMO PRIMER PERÍODO DE SESIONES

Documentos Oficiales

SEXTA COMISIÓN
28ª sesión
celebrada el jueves
31 de octubre de 1996
a las 10.00 horas
Nueva York

ACTA RESUMIDA DE LA 28ª SESIÓN

Presidente: Sr. ESCOVAR SALOM (Venezuela)

más tarde: Sra. WONG (Nueva Zelandia)
(Vicepresidenta)

SUMARIO

TEMA 147 DEL PROGRAMA: ESTABLECIMIENTO DE UNA CORTE PENAL INTERNACIONAL
(continuación)

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

La presente acta está sujeta a correcciones. Dichas correcciones deberán enviarse, con la firma de un miembro de la delegación interesada, y *dentro del plazo de una semana a contar de la fecha de publicación*, a la Jefa de la Sección de Edición de Documentos Oficiales, oficina DC2-750, 2 United Nations Plaza, e incorporarse en un ejemplar del acta.

Las correcciones se publicarán después de la clausura del período de sesiones, en un documento separado para cada Comisión.

Distr. GENERAL
A/C.6/51/SR.28
2 de octubre de 1997
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.

TEMA 147 DEL PROGRAMA: ESTABLECIMIENTO DE UNA CORTE PENAL INTERNACIONAL
(continuación) (A/49/10 y A/51/22, vols. I y II)

1. El Sr. SZÉNÁSI (Hungría) dice que su delegación ha considerado desde un principio que la preparación del estatuto de una corte penal internacional constituiría una importante contribución al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. El momento para hacerlo es el oportuno, tal como ponen de manifiesto las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas durante los últimos años.

2. A pesar de los temores expresados de que pueda no llegar nunca a tener carácter universal, la corte debe establecerse en virtud de un tratado multilateral, ya que su legitimidad e independencia únicamente pueden ser garantizadas en virtud de un tratado. En cualquier caso, las otras posibilidades también tienen aspectos negativos, aun cuando la corte debe mantener una estrecha relación con las Naciones Unidas, tal como se prevé en el artículo 2 del proyecto de estatuto de la Comisión de Derecho Internacional (CDI).

3. El orador puede aceptar la solución de avenencia del párrafo 1 del artículo 4 en el sentido de que la corte debe ser un órgano semipermanente, si bien debe reforzarse su carácter permanente mediante la creación de determinadas oficinas, lo que deja abierta la posibilidad de que la corte pase a ser permanente más adelante. Por lo que respecta a los requisitos que han de reunir los magistrados, no hay necesidad de establecer una distinción inflexible entre los criterios de experiencia en procesos penales y competencia en derecho internacional, aunque debe hacerse más hincapié en lo primero. A este respecto, los artículos correspondientes del proyecto deben rectificarse en pequeños aspectos. El orador está de acuerdo con la idea de que se establezca un límite de edad y mantiene un criterio flexible en cuanto al requisito de que se establezca un equilibrio entre los sexos.

4. La competencia de la corte debe limitarse a los denominados crímenes básicos, que deben definirse claramente en el estatuto. Debe incluirse el crimen de genocidio, junto con la definición que figura en el artículo 2 del Convenio de Ginebra de 1948. La ampliación de la definición, con objeto de que abarque a los grupos sociales y políticos, puede abordarse en relación con los crímenes de lesa humanidad. El orador prefiere que no se incluya la disposición sobre crímenes accesorios (artículo III del Convenio de Ginebra) y que esos crímenes se aborden en una disposición general.

5. Las violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados también deben quedar dentro de la competencia de la corte. El orador acepta el título general de "crímenes de guerra" que estableció la CDI en el artículo 20 del proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. En cualquier caso, esa categoría debe incluir los crímenes abarcados por el Convenio de La Haya de 1907 y los Convenios de Ginebra de 1949, así como violaciones graves comparables de otros convenios pertinentes. El artículo 3 (común) de los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional II, relativo a los conflictos armados que no son de carácter

/...

internacional, también deben figurar en esa categoría. Asimismo los crímenes de lesa humanidad reúnen los requisitos para ser incluidos dentro de la competencia de la corte y deben especificarse en el estatuto en términos similares a la definición que figura en los estatutos de los tribunales para la ex Yugoslavia y Rwanda y en el proyecto de código de crímenes, que se basan en la idea de que los crímenes de lesa humanidad no pueden limitarse a actos realizados en tiempo de guerra. No obstante, el carácter generalizado y sistemático de esos delitos debe formar parte de la definición con objeto de distinguirlos de los delitos ordinarios que se tipifican en la legislación interna. La definición debe incluir una lista de crímenes; además, puede ciertamente arbitrarse una solución al problema del carácter abierto de la lista, que satisfaga el principio de nullum crimen sine lege y la necesidad de evitar que se limite la competencia de la corte.

6. La delegación de Hungría aún no ha adoptado una posición definitiva respecto de la inclusión del crimen de agresión. Habida cuenta de la gravedad y de los precedentes de los juicios de Nuremberg y Tokio, está justificada la inclusión, pero es difícil encontrar un equilibrio entre el derecho de la corte a establecer una responsabilidad penal individual y la función primordial del Consejo de Seguridad de mantener la paz y la seguridad internacionales. Si no puede resolverse ese problema, el objetivo principal de establecer la corte en un futuro previsible puede obligar a aceptar la posición de quienes se oponen a la inclusión de la agresión. Si la Asamblea General decide incorporar el proyecto de código de crímenes al estatuto de la corte, debe examinarse detenidamente la inclusión de los crímenes contra el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado dentro de la categoría de crímenes básicos.

7. El orador reitera su apoyo al establecimiento de un mecanismo de examen. Aunque son comprensibles las razones en que se basan las críticas a ese mecanismo, es importante no desechar la inclusión del crimen de agresión y posiblemente de otros crímenes graves. En un principio, Hungría acogió favorablemente la inclusión de la categoría de los crímenes definidos en las disposiciones de los tratados y pidió la ampliación de la lista de esos crímenes. No obstante, actualmente los intentos de que la competencia de la corte no se haga extensiva a más crímenes no haría sino retrasar más el proceso.

8. Dado que los crímenes básicos entran dentro de la competencia de la corte, la propuesta de ampliar la jurisdicción intrínseca a todos los crímenes básicos merece ser examinada detenidamente. La competencia intrínseca no es idéntica a la jurisdicción exclusiva ni incompatible con la complementariedad, la soberanía y el consentimiento de los Estados. A este respecto, el número de Estados cuyo consentimiento es necesario para que la corte ejerza su competencia debe mantenerse en un nivel mínimo. Ha de modificarse el artículo 22, ya que atribuye a la corte un ámbito de competencia muy restringido. Por lo que respecta al papel del Consejo de Seguridad (proyecto de artículo 23), la delegación de Hungría está de acuerdo con el párrafo 1, que permite que el Consejo remita asuntos a la corte cuando esté actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta. No se puede adoptar una posición definitiva en relación con el párrafo 2 hasta que se logre un consenso respecto de la inclusión del crimen de agresión. No queda claro que el párrafo 3 sirva para cumplir el objetivo que en él se prevé, por lo que debe redactarse de nuevo. Todas las partes deben estar facultadas para presentar denuncias al fiscal, razón por la que debe enmendarse el artículo 23. La función del fiscal que se

establece en el artículo 26 es demasiado restringida, si bien la ampliación de la función que se propone debe armonizarse con el papel de los Estados partes y del Consejo de Seguridad.

9. A pesar de las dificultades que se plantean, la compilación de propuestas sobre cuestiones procesales y de otra índole puede salvar las diferencias que existen entre los sistemas del common law y del derecho civil y facilitará la realización de nuevos trabajos encaminados a lograr un consenso. En relación con esa cuestión, el orador considera que el acusado debe estar presente durante el juicio. No obstante, habida cuenta de la gravedad de los crímenes, es aceptable considerar la posibilidad de que, en contadas ocasiones, se celebren juicios en rebeldía o, por lo menos, determinadas actuaciones, según se dispone en el párrafo 4 del artículo 37. Únicamente debe recurrirse a ello cuando el acusado intente impedir que la corte ejercite su competencia negándose a comparecer en el juicio, lo que representa una excepción más restringida que la norma general que figura en el apartado c) del párrafo 2 del artículo 37 del proyecto. Aun en esos casos limitados, deben respetarse plenamente los derechos del acusado.

10. El Comité Preparatorio ha realizado importantes progresos, razón por la que la fecha de la conferencia diplomática debe fijarse en el actual período de sesiones de la Asamblea General con objeto de evitar que el proceso pierda impulso. Las restantes cuestiones pueden dividirse en dos categorías: las procesales o técnicas pueden abordarse durante las nueve semanas que durarán los nuevos trabajos que se realizarán según recomienda el Comité Preparatorio; por lo demás, las cuestiones sustantivas que exijan la adopción de decisiones políticas de alto nivel podrán resolverse finalmente en la conferencia. En consecuencia, el orador no prevé una conferencia de carácter protocolario, sino una conferencia operativa que durará varias semanas. El orador apoya la recomendación del Comité Preparatorio de que la conferencia se celebre en 1998.

11. La Sra. Wong (Nueva Zelandia), Vicepresidenta, ocupa la Presidencia.

12. El Sr. WENAWESER (Liechtenstein) dice que el Comité Preparatorio ha realizado progresos considerables con miras a establecer un instrumento jurídico universalmente aceptable en el que ha de basarse la corte penal internacional. Liechtenstein sigue siendo partidario del pronto establecimiento de la corte, que debe estar dotada de la autoridad necesaria para romper el círculo vicioso de la impunidad y de las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

13. Es preciso examinar detenidamente muchos proyectos del proyecto de estatuto, si bien el lugar adecuado para hacerlo es el Comité Preparatorio. Algunas de las cuestiones pendientes son de importancia capital y no cabe negar la complejidad de la tarea, si bien el factor más importante es el consenso que está surgiendo en relación con la necesidad del establecimiento de la corte. A juicio de la delegación de Liechtenstein, la corte debe ser eficaz e independiente y tener únicamente competencia respecto de los crímenes considerados más graves en el derecho internacional. El estatuto debe contener disposiciones relativas a un mecanismo de examen, el cual servirá para que pueda ampliarse la lista inicial de crímenes básicos. La brevedad de la lista de crímenes básicos debe garantizar que todos los Estados partes acepten la

/...

competencia de la corte respecto de esos crímenes, al tiempo que la competencia intrínseca de la corte contribuirá a dotar a ésta de eficacia.

14. Los crímenes deben definirse claramente y, a tal efecto, el Comité Preparatorio ha de tener plenamente en cuenta el proyecto de código de crímenes de la CDI durante sus próximos trabajos. Las disposiciones del estatuto relativas a la complementariedad deben redactarse detenidamente para garantizar su equilibrio con la competencia nacional. La corte debe financiarse con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas.

15. Parece posible la aprobación de un estatuto por una conferencia de plenipotenciarios que se celebrará próximamente. Aunque la Sexta Comisión ha de proceder con flexibilidad y determinación, no debe perderse el impulso actual. Por ello, el orador apoya la propuesta de que, en el período de sesiones en curso, la Asamblea General adopte la decisión de convocar una conferencia en 1998. Además, ha de adoptarse un enfoque flexible respecto de la futura labor del Comité Preparatorio. En su quincuagésimo segundo período de sesiones, la Asamblea General podrá adoptar nuevas decisiones a la luz de los progresos realizados en 1997.

16. La Sra. FLORES (México) dice que, aunque el establecimiento de una corte penal internacional es una aspiración multilateral desde hace varios decenios, ha habido que esperar al momento actual para que las Naciones Unidas participasen en negociaciones concretas encaminadas a crear esa institución. México apoya ese proceso y está convencido de que únicamente mediante un esfuerzo conjunto se podrá lograr el éxito de la corte. En los trabajos preparatorios se han delimitado ciertos problemas para los que aún no se han arbitrado soluciones de aceptación general. A pesar del mandato que figura en la resolución 50/46 de la Asamblea General, el Comité Preparatorio no ha pasado de la etapa de negociación. Las más de 300 páginas que ocupan las propuestas formuladas, frecuentemente conflictivas, y ciertamente el proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, habrán de ser examinados durante las próximas nueve semanas de trabajo del Comité Preparatorio.

17. La Asamblea General habrá de adoptar una decisión respecto de la futura trayectoria de los trabajos. La oradora considera que debe convocarse una conferencia de plenipotenciarios únicamente cuando se hayan sentado las bases para lograr el éxito, si bien no queda claro cómo se resolverán las dificultades en el Comité Preparatorio o si será posible contar con un texto refundido de un proyecto de convención de aceptación general para los Estados. Aunque es importante no prolongar innecesariamente los trabajos ni desaprovechar la oportunidad que existe en la actualidad, los progresos deben ser medidos, aunque seguros. Por ello, la oradora está de acuerdo con las conclusiones del Comité Preparatorio que figuran en su informe (A/51/22). Es necesario emprender ya una etapa de negociación de hasta nueve semanas; además, la Asamblea General, en su quincuagésimo segundo período de sesiones, debe fijar la fecha de celebración de una conferencia de plenipotenciarios a la vista de los progresos realizados durante los trabajos preparatorios. Deben arbitrarse medios para garantizar que participe el mayor número posible de Estados en los futuros trabajos del Comité Preparatorio, en el que la delegación de México seguirá tomando parte con espíritu constructivo.

18. La Sra. CUETO MILIÁN (Cuba) dice que respalda el frágil consenso logrado en el período de sesiones del Comité Preparatorio celebrado en agosto de 1996 en relación con la posibilidad de convocar una conferencia de plenipotenciarios en 1998, después de la terminación de las negociaciones que acaban de empezar sobre cuestiones sustantivas.

19. La independencia y la autoridad de la corte y el respeto de los principios de la igualdad soberana de los Estados y su libre consentimiento únicamente pueden garantizarse mediante un tratado multilateral abierto a la firma de todos los Estados, cuya entrada en vigor exigirá un gran número de ratificaciones. La corte ha de ser un órgano judicial independiente; su independencia debe definirse claramente en su estatuto y su competencia debe limitarse a los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio. La administración de justicia a nivel internacional no debe entrar en conflicto con los ordenamientos jurídicos internos de los Estados ni con la competencia de sus tribunales nacionales. El principio de la complementariedad es un elemento esencial para que la corte desempeñe sus funciones respecto de los tribunales nacionales. Las funciones policiales y la aplicación del derecho penal son prerrogativas de los Estados soberanos; la competencia de la corte, por definición, constituirá una excepción a esas prerrogativas y únicamente debe recurrirse a ella cuando los sistemas de justicia internos no sean operativos.

20. La corte ha de estar estrechamente vinculada a las Naciones Unidas, aunque esa relación ha de basarse en la independencia de la corte y en el carácter universal de la Organización. El Consejo de Seguridad no debe injerirse en los asuntos internos de la corte. El carácter concreto de la relación podrá definirse únicamente cuando la comunidad internacional haya logrado un consenso respecto de la naturaleza de la corte y del alcance de su competencia.

21. Habrá de procederse a la definición de los crímenes que entran dentro de la competencia de la corte en una etapa posterior del proceso de redacción del estatuto. El proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, aprobado por la CDI en 1996, puede servir únicamente de base para los futuros trabajos de definición de esos crímenes. El estatuto debe codificar el derecho internacional consuetudinario, pero ha de abstenerse de llevar a cabo un desarrollo progresivo del derecho internacional en ese ámbito. La práctica del derecho de los tratados no debe ser objeto de vagas interpretaciones en el estatuto.

22. La corte ha de ejercer su competencia de conformidad con el derecho aplicable, con arreglo a su estatuto. Al igual que cualquier órgano judicial, la corte no tendrá capacidad legislativa. El establecimiento de la corte no debe redundar en perjuicio del sistema internacional de solución de controversias ni, en particular, de las funciones asignadas a los órganos principales de las Naciones Unidas por la Carta. En su calidad de órgano jurisdiccional internacional, la corte debe ocuparse únicamente de la responsabilidad penal de las personas que cometan crímenes graves, según se define en su estatuto.

23. El Sr. FATOUROS (Grecia) dice que su país se suma a la declaración formulada por el representante de Irlanda en nombre de la Unión Europea y que las observaciones que va a formular han de considerarse precisiones a esa declaración. Ha de procesarse a las personas responsables de la comisión de los

delitos de genocidio, agresión, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por ello, es especialmente satisfactorio el hecho de que esté a punto de culminar el largo proceso de preparación del establecimiento de una corte penal internacional. Ese proceso contrasta marcadamente con los métodos tradicionales de reflexión y actuación en el marco del derecho internacional y, por ello, no es de extrañar que aún no se haya logrado un consenso en relación con todas las cuestiones. La relación entre la corte y las Naciones Unidas, por ejemplo, resulta difícil de precisar, ya que la relación entre los órganos políticos y jurídicos constituye un asunto delicado incluso en el ámbito nacional.

24. Hay otras cuestiones de una importancia y una dificultad similares, entre las que figura la necesidad de definir con precisión los términos de la complementariedad entre el ejercicio de la competencia nacional e internacional y el ámbito concreto de la competencia de la corte. Afortunadamente el proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad y las disposiciones pertinentes del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados presentados por la CDI a la Sexta Comisión en su último informe (A/51/10) son especialmente pertinentes a ese respecto.

25. A lo largo de los años, los sistemas constitucionales y judiciales nacionales y los instrumentos internacionales han establecido principios y prácticas relativos a la protección de los derechos humanos. Sin embargo, habida cuenta de la falta de una tradición de larga data al respecto, el estatuto de la corte ha de hacerse plenamente eco de esos principios, incluida la protección de los derechos del acusado. En lugar de incluir prolijas disposiciones procesales, tal vez sea más conveniente hacer una referencia sucinta, aunque completa, a esos principios, lo que daría oportunidad a la corte de desarrollar posteriormente su contenido de manera más precisa.

26. Será necesario que se celebren tres o cuatro períodos de sesiones del Comité Preparatorio con objeto de tener preparado un informe completo a más tardar en 1998. Algunos de los problemas más difíciles e importantes se resolverán únicamente mediante concesiones mutuas en la conferencia diplomática. El establecimiento de una corte penal internacional debe ser uno de los logros más importantes de la comunidad internacional cuando está a punto de concluir el Decenio de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional (1990-1999): por ello, la conferencia debe convocarse a más tardar en junio de 1998.

27. El Sr. SIDI ABED (Argelia) dice que el establecimiento de una corte internacional permanente, en lugar de la creación apresurada de tribunales especiales, es el medio más adecuado para hacer frente a crímenes que repugnan a la conciencia de la humanidad. En el momento actual existe una posibilidad real de establecer esa corte, si bien su éxito dependerá de que se logre evitar la politización de ese proceso. La imposición de limitaciones de tiempo a las negociaciones no constituirá sino una amenaza para el apoyo universal a la corte y afectará a su capacidad de prevenir y reprimir los crímenes internacionales más graves.

28. El objetivo del proceso es establecer una corte independiente e imparcial, inmune a la influencia externa. En su estatuto debe partirse de la hipótesis de que la administración de justicia en su territorio es una obligación fundamental que corresponde a cada Estado en el ejercicio de su soberanía. Por ello, deben

tenerse presentes la legislación y las prácticas de los diversos sistemas jurídicos que existen.

29. En relación con la competencia ratione materiae de la corte, el orador dice que la corte sólo debe tener competencia respecto de los delitos que constituyan manifiestamente crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. No obstante, el orador no es partidario de que se establezca un enfoque sumamente restringido en el sentido de incluir únicamente el genocidio, la agresión, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Durante los trabajos que realice en adelante el Comité Preparatorio, la delegación de Argelia insistirá en que se incluyan los actos de terrorismo, crímenes éstos cuya gravedad y carácter internacional están fuera de toda duda. Por lo que respecta a los crímenes definidos en las disposiciones de los tratados, el orador dice que los delitos punibles con arreglo a los tratados internacionales de terrorismo deben incluirse entre los crímenes internacionales.

30. El estatuto debe referirse expresamente al proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad y ambos textos han de ser compatibles entre sí. El proyecto de código y, en particular, la lista de crímenes que contiene, pueden constituir una importante aportación a los efectos de determinar la competencia de la corte. El hecho de que los actos de terrorismo figuren en la lista de crímenes del artículo 20 del proyecto de código respalda la posición de la delegación de Argelia en relación con esa cuestión.

31. La competencia penal internacional de la corte debe basarse también en el consentimiento de los Estados y no puede hacerse ninguna excepción en el caso del crimen de genocidio ni de ningún otro, dado que la corte sólo podrá actuar con eficacia si media ese consentimiento.

32. En relación con el mecanismo de activación, el orador se pregunta si, habida cuenta del riesgo de que se politice el funcionamiento de la corte, no cabría suprimir el artículo 23 del proyecto de estatuto. La distinción entre miembros permanentes, no permanentes y Estados que no son miembros del Consejo de Seguridad pone en tela de juicio toda la doctrina de la igualdad ante la ley y, además, puede menoscabar la confianza en la imparcialidad de la corte.

33. En relación con el principio de la complementariedad, los tribunales nacionales han de seguir teniendo una competencia primaria. La corte penal internacional ha de tener competencia únicamente a falta de competencia nacional o cuando los tribunales nacionales competentes no estén en condiciones de entender de determinados crímenes excepcionales que estén claramente definidos. El principio de la complementariedad excluye toda jerarquía entre la competencia nacional y la de la corte. Ésta no tendrá competencia en asuntos relativos a la calidad, el carácter, la legitimidad o la eficacia de los tribunales nacionales.

34. Ha llegado el momento de establecer una corte penal internacional. El Comité Preparatorio debe continuar sus trabajos sobre la base del consenso, teniendo en cuenta las preocupaciones ya expresadas por los Estados. Ello es una condición sine qua non para la convocación de una conferencia diplomática, razón por la que la delegación de Argelia respaldará todas las gestiones que se realicen a tal efecto. Si se cumplen esas condiciones, cabe considerar que a finales de 1998 sería viable la celebración de tan importante acontecimiento.

/...

35. La Sra. WILMSHURST (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) expresa el apoyo de su delegación a la declaración formulada por Irlanda en nombre de la Unión Europea.

36. La oradora confirma su apoyo al establecimiento de una corte penal internacional encargada de enjuiciar algunos de los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional y de actuar como elemento de disuasión. El Comité Preparatorio ha realizado una ingente labor, particularmente de compilación de las propuestas recibidas, si bien aún queda mucho por hacer. Las numerosas propuestas presentadas al Comité Preparatorio deben ser examinadas muy detenida y detalladamente antes de la celebración de la conferencia. Aunque no cabe duda que algunas cuestiones sólo se resolverán en la conferencia, hay muchos ámbitos que requieren un examen más detenido y que se precisen las soluciones por las que puede optarse antes de que se adopten decisiones definitivas sobre las disposiciones pertinentes del estatuto. En particular, se requiere un examen a fondo en el caso de la definición de los crímenes que entran dentro de la competencia de la corte, los elementos de los crímenes y los principios del derecho penal, la organización de la corte y su procedimiento y las disposiciones relativas a la cooperación de los Estados con la corte. La oradora está de acuerdo con la conclusión del Comité Preparatorio de que se necesitan hasta nueve semanas más para concluir los trabajos preparatorios y considera que la Asamblea General debe fijar, durante el período de sesiones en curso, la fecha de convocación de una conferencia en 1998 y examinar los progresos realizados por el Comité Preparatorio en su quincuagésimo segundo período de sesiones.

37. Las opiniones de la delegación del Reino Unido sobre las características claves de la corte se consignan en la declaración que formuló ante la Sexta Comisión en 1995 y en la declaración formulada en nombre de la Unión Europea durante el debate en curso. La oradora desea destacar, no obstante, que uno de los elementos fundamentales de una futura corte penal internacional es su relación con los órganos jurisdiccionales nacionales; ello es uno de los factores más importantes para lograr la aceptación de la corte por los gobiernos y, por ello, su éxito. La delegación del Reino Unido ha presentado propuestas con miras a que se incluya de manera más clara y detallada en el estatuto el principio de aceptación generalizada de la complementariedad. Debe recurrirse a la corte únicamente cuando no puedan intervenir los sistemas nacionales o cuando su intervención no sea eficaz. La corte debe respetar todas las decisiones pertinentes de las autoridades nacionales en asuntos de su interés, si bien debe estar en condiciones de intervenir cuando las decisiones de las autoridades nacionales no sean de buena fe o cuando no puedan intervenir los órganos jurisdiccionales nacionales.

38. La oradora insta a las delegaciones a que se esfuercen por lograr un consenso a los efectos de preparar un proyecto de convención que sirva de texto básico para la conferencia, con objeto de que haya el mayor número de posibilidades de que el estatuto sea objeto de un apoyo generalizado.

39. El Sr. ENKHS AIKHAN (Mongolia) dice que su delegación respalda el establecimiento de una corte penal internacional. La compilación de propuestas sobre cuestiones sustantivas y procesales preparada por el Comité Preparatorio es de utilidad para que la futura labor que se realice se encamine al logro de ese fin.

/...

40. El orador desea hacer algunas observaciones sobre las principales cuestiones abordadas por el Comité Preparatorio. La corte debe ser una institución judicial independiente y permanente, estrechamente vinculada a las Naciones Unidas, con una representación equilibrada y con capacidad de adoptar decisiones de manera independiente. Debe tener una competencia claramente definida, gozar de un firme apoyo de los Estados y establecerse en virtud de un tratado multilateral, al tiempo que es preciso que sean partes en su estatuto el mayor número posible de Estados. Con objeto de garantizar en mayor medida la independencia y la aceptación universal de la corte, la parte dispositiva del estatuto debe contener un artículo en el que se establezcan los objetivos de la corte y los principios fundamentales del derecho internacional, así como los principios generales del derecho penal y el procedimiento que debe seguirse en sus actuaciones.

41. La delegación de Mongolia considera aceptable la mayor parte del proyecto preparado por la CDI. En particular, está de acuerdo con el proyecto de artículo 25 en el que se establece, bajo ciertas condiciones, que todo Estado parte, y no únicamente los que tengan un interés concreto en el asunto, tiene derecho a presentar una denuncia al fiscal. Los proyectos de artículos 34, 35 y 36 contienen las debidas salvaguardias frente a cualquier abuso; además, en el estatuto puede preverse que los Estados denunciadores hayan de aceptar también la competencia de la corte respecto de los crímenes que sean objeto de las denuncias que presenten.

42. En la parte dispositiva del estatuto dedicada al principio de la complementariedad debe incluirse una disposición concreta en la que se definan el carácter y el alcance de la cooperación entre la corte y los sistemas jurisdiccionales nacionales, así como la obligación de los Estados partes de cooperar con la corte de manera efectiva y rápida. Entre los criterios para determinar si la corte internacional o una corte nacional debe entender de un asunto concreto cabe mencionar la gravedad del crimen y la capacidad de los tribunales nacionales de celebrar juicios imparciales, si bien la corte internacional debe quedar facultada para decidir si los tribunales nacionales son o no son eficaces.

43. La competencia de la corte debe limitarse a los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto. El crimen de agresión debe incluirse, tal como se indica en el proyecto de la CDI. La competencia de la corte debe abarcar también otros crímenes como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, las violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados y algunos crímenes definidos en las disposiciones de los tratados, incluidos tal vez los crímenes que se indican en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y en la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado. Cabe incluir también crímenes graves relacionados con las drogas y el terrorismo cuando los tribunales nacionales no puedan procesar a sus autores. Con objeto de reforzar la independencia de la corte, debe ampliarse su competencia intrínseca, se deben conferir facultades más amplias al fiscal y debe limitarse el papel del Consejo de Seguridad en las actuaciones de la corte. Las amenazas graves al medio ambiente que tengan consecuencias profundas y duraderas deben incluirse entre los crímenes básicos en el proyecto de artículo 20 o en el anexo del estatuto, ya que existe una laguna jurídica al respecto. Al definir los crímenes básicos, debe tenerse presente el proyecto de

código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. Las penas deben ser suficientemente graves para que tengan un efecto disuasorio e incluso deben incluir la pena de muerte en algunos casos. La corte habrá de financiarse con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas; debe hacerse lo posible para evitar la imposición de obligaciones económicas improcedentes a terceros países. En el estatuto se debe prever un mecanismo de revisión permanente que permita que la corte se adapte a la evolución de las circunstancias.

44. El orador está de acuerdo con la recomendación del Comité Preparatorio de que, antes de la conferencia de plenipotenciarios de 1998, el Comité debe reunirse tres veces, hasta un total de nueve semanas, con objeto de preparar el texto refundido de una convención constitutiva de la corte que sea de aceptación general.

45. El Sr. VAN-DUNEM (Angola) dice que la corte penal internacional puede desempeñar un papel fundamental para impedir y reprimir los crímenes más graves que constituyen una amenaza contra la paz y la seguridad internacionales. Ha llegado el momento de establecer la fecha definitiva de convocación de la conferencia de plenipotenciarios. Habida cuenta de la urgente necesidad de establecer la corte, en un próximo futuro han de resolverse cuestiones tales como las de su estatuto, sus relaciones con las Naciones Unidas y su funcionamiento.

46. Debe existir una estrecha colaboración entre la corte y los demás órganos de las Naciones Unidas, siempre que no se ponga en peligro la independencia y la autonomía de la corte, ya que ello es garantía de equidad y de justicia en sus fallos. Además, de conformidad con el principio de la complementariedad, la corte intervendrá únicamente cuando los sistemas de justicia penal nacionales resulten ineficaces. La corte debe tener competencia respecto de los crímenes más graves, como el genocidio, la agresión, los crímenes de guerra, el apartheid y los crímenes de lesa humanidad. Los magistrados de la corte deben elegirse de entre candidatos pertenecientes exclusivamente a los Estados Miembros, si bien no es necesario que sean nacionales de los Estados partes en la futura convención. Cuando se proceda al nombramiento de los magistrados, debe observarse el principio de representación geográfica equitativa y han de estar representados los principales sistemas judiciales. Para concluir, el orador expresa el agradecimiento de su delegación al Gobierno de Italia por su ofrecimiento de ser anfitrión de la conferencia diplomática.

47. El Sr. BERROCAL SOTO (Costa Rica) dice que los crímenes más graves contra la humanidad no deben quedar impunes a causa de la ineficacia o de la inexistencia de mecanismos jurídicos adecuados. El establecimiento por el Consejo de Seguridad de tribunales especiales, como los tribunales para la ex Yugoslavia y Rwanda, ha resultado ser un importante paso, aunque no constituye una solución definitiva, ya que su establecimiento ha sido objeto de decisiones políticas en el marco del Consejo de Seguridad. Es necesario establecer un instrumento permanente e independiente para procesar y castigar a los autores de esos crímenes.

48. El orador reconoce las importantes dificultades técnicas que entraña el establecimiento de la corte, para lo cual es preciso establecer un equilibrio adecuado entre los conceptos procesales y los intereses políticos, así como

tener en cuenta las garantías procesales del acusado y el derecho de las víctimas y de la comunidad internacional a que se haga justicia. Con todo, es indispensable que se establezca rápidamente una corte penal internacional. Por ello, el orador expresa su apoyo oficial a la convocación de una conferencia de plenipotenciarios en junio de 1998, que se encargaría de concluir y aprobar una convención sobre el establecimiento de esa corte, la cual quedaría constituida en 1999. Por lo demás, el orador agradece al Gobierno de Italia su ofrecimiento de ser anfitrión de la conferencia.

49. Aún hay varias cuestiones sustantivas que preocupan a la delegación de Costa Rica. En primer lugar, deben respetarse debidamente los derechos humanos del acusado, quien ha de contar con las debidas garantías procesales de conformidad con los principios concretos de nullum crimen sine lege e in dubio pro reo; además, la sentencia debe respetar los derechos humanos de la persona declarada culpable. Costa Rica abolió la pena capital hace casi 120 años y no puede apoyar el establecimiento de una corte que imponga dicha pena. En segundo lugar, para que sea independiente e imparcial, la corte habrá de tener únicamente legitimidad política y validez jurídica. El papel del Consejo de Seguridad respecto de las actividades de la corte debe ser sumamente limitado y debe conferirse al fiscal la facultad de iniciar investigaciones de oficio, cualquiera que sea la fuente de la que procedan las denuncias. A este respecto, el orador está de acuerdo con la propuesta de establecer una sala que, una vez que el fiscal haya iniciado la investigación, determinará si deben imputarse cargos. En los debates que se celebren debe distinguirse claramente entre las atribuciones y la competencia que tienen respectivamente el fiscal y el Consejo de Seguridad, teniendo en cuenta lo que se establece en la Carta de las Naciones Unidas. En tercer lugar, debe establecerse un mecanismo práctico para traspasar a la nueva corte los recursos ya invertidos y la experiencia adquirida en el marco de los tribunales especiales para la ex Yugoslavia y Rwanda. Por último, el orador dice que está de acuerdo con el proyecto de resolución presentado por el Comité Preparatorio a la Sexta Comisión.

50. El Sr. SCHEFFER (Estados Unidos de América) dice que está de acuerdo con el establecimiento de una corte penal internacional permanente porque no deben seguir actuando con impunidad los autores de violaciones graves y masivas del derecho internacional humanitario. Los tribunales especiales para la ex Yugoslavia y Rwanda han constituido un primer paso fundamental, si bien es necesario establecer una corte permanente que disuada de la comisión de crímenes infames a nivel mundial y pueda investigar y procesar a sus autores.

51. El año pasado, el Comité Preparatorio realizó progresos en la preparación de un proyecto de estatuto de la corte, basándose en los trabajos previos de la CDI y contando con la ayuda especial de organizaciones no gubernamentales. La delegación de los Estados Unidos de América ha participado activamente en todos y cada uno de los aspectos de los trabajos, ya que respalda el establecimiento de una corte penal justa, eficaz y verdaderamente internacional que respete todas las garantías procesales pertinentes e impulse, a nivel internacional y nacional, el cumplimiento de la ley y los intereses de la justicia militar.

52. La próxima tarea consiste en trabajar intensamente en 1997 para preparar un proyecto de estatuto refundido que sea objeto del más amplio consenso posible. Deben ponerse en marcha planes con miras a la celebración, a mediados de 1998, de una conferencia de plenipotenciarios relativamente breve y que sea

fructífera. No obstante, queda por delante la tarea más difícil y, si ésta no concluye a comienzos de 1998, la celebración de la conferencia ese año entrañará riesgos considerables para el establecimiento de la corte. No se debe celebrar la conferencia diplomática hasta que se hayan resuelto satisfactoriamente muchas cuestiones técnicas y controvertidas que aún quedan pendientes, ya que ello permitirá que la convención sea objeto del mayor respaldo posible.

53. El orador desea formular observaciones en relación con algunas de las cuestiones fundamentales que tiene planteadas el Comité Preparatorio. En relación con el mecanismo de activación, el Consejo de Seguridad ejerce una responsabilidad primaria respecto del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales de conformidad con el Artículo 24 de la Carta. El establecimiento de una corte penal internacional permanente no puede entrañar la reforma de ese u otro Artículo de la Carta, ya que es fundamental que no se vean obstaculizados los esfuerzos que realiza el Consejo de Seguridad para mantener la paz y la seguridad internacionales. Algunas delegaciones sostienen que el Consejo de Seguridad politizaría la labor de la corte. El orador considera que el Consejo de Seguridad debe estar en condiciones de remitir una situación a la corte; en ese caso, el fiscal actuará con completa independencia para realizar investigaciones y actuaciones en casos concretos que guarden relación con esa situación. El ejemplo de los tribunales para la ex Yugoslavia y Rwanda pone de manifiesto que ese papel del Consejo de Seguridad no afectará al funcionamiento independiente de la corte y que ese procedimiento eliminará la necesidad de crear tribunales especiales en el futuro.

54. Las inquietudes que suscita el papel del Consejo de Seguridad se basan también en la premisa de que el Consejo es un órgano político cuya actuación es, por consiguiente, totalmente sospechosa, en tanto que los gobiernos y el personal de la corte actúan de manera objetiva y apolítica. No obstante, no cabe duda de que un gobierno que presente una denuncia a la corte contra una persona no es sólo tan político como el Consejo, sino posiblemente incluso más. Por otra parte, dadas su composición y funciones generales, el Consejo de Seguridad está por encima de las opiniones y planes políticos de sus distintos miembros. Por ello, el orador considera que un determinado Estado debe poder remitir únicamente una "situación" a la corte y no un caso concreto.

55. La tarea de realizar investigaciones y actuaciones sobre casos concretos relacionados con una situación general debe corresponder al fiscal. Dado que la competencia de la corte se concentrará en los crímenes de suma gravedad y carácter generalizado, es importante determinar el número y la identidad de los sospechosos. El orador cuestiona la competencia de los Estados partes para concretar y preparar denuncias contra los sospechosos de manera individualizada. Por el contrario, la competencia de los Estados partes estriba en detectar situaciones que justifiquen investigar la existencia de una culpabilidad individual y en facilitar a la corte la información y la asistencia necesarias para que ésta pueda realizar una investigación completa, imparcial e independiente.

56. También es necesario establecer contrapesos y salvaguardias en relación con las decisiones del fiscal. Si el fiscal tuviese la facultad exclusiva de iniciar investigaciones y presentar denuncias - como implica el concepto de "competencia intrínseca" - los resultados podrían tener un carácter aún más político que las decisiones del Consejo de Seguridad.

57. Por otra parte, la denuncia interpuesta por un gobierno concreto o incluso por el fiscal podría referirse directamente a medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad para abordar un conflicto determinado. Por ello, es importante que toda situación de la que se esté ocupando el Consejo de Seguridad no se remita a la corte por un Estado parte sin el consentimiento del Consejo. Aunque cabe considerar que el proceso judicial es un componente necesario de la gestión de un conflicto por el Consejo de Seguridad, esa consideración ha de hacerla el Consejo y no un Estado parte ni el fiscal.

58. Cuando el Consejo de Seguridad no se ocupe de una situación remitida por un Estado parte, la corte resolverá si el asunto entra dentro de su competencia. Los principios de la complementariedad y del consentimiento del Estado seguirán siendo de aplicación. Así pues, algunas situaciones remitidas por los Estados exigirán la aprobación previa del Consejo, en tanto que otras llegarán a la corte sin haber sido examinadas por el Consejo. Las remisiones hechas por el Consejo de Seguridad entrañarán probablemente una considerable carga de trabajo para la corte, aspecto que no debe soslayarse por quienes cuestionan la vinculación entre el Consejo y la corte.

59. El orador sigue considerando difícilmente aceptable el sistema adoptado en el proyecto para determinar las categorías de Estados cuyo consentimiento es preciso recabar antes de que un asunto pueda ser objeto de investigaciones y actuaciones ante la corte. El mecanismo de determinación debe ampliarse en algunos aspectos para tener en cuenta los intereses fundamentales de otros Estados y restringirse en otros con objeto de que la competencia de la corte sea eficaz.

60. En relación con la definición de los crímenes, es primordial que la corte cuente con una definición clara, detallada y establecida de común acuerdo en relación con los crímenes que entran dentro de su competencia. Así, no es suficiente establecer que los crímenes de lesa humanidad incluyen la deportación, habida cuenta que la mayoría de los países deporta legalmente a personas de manera sistemática.

61. Un concepto que presenta aún mayores dificultades es la agresión. A pesar de su importancia histórica, lo cierto es que el concepto no está suficientemente definido a los efectos de determinar la responsabilidad penal individual. El precedente histórico fundamental no es la agresión, sino el hecho de emprender una guerra de agresión, concepto éste más restringido, en relación con situaciones concretas.

62. Sería más adecuado concentrarse en definir los crímenes básicos de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, lo que resulta bastante difícil. Es primordial asegurarse de que la competencia respecto de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad abarca las situaciones internas; de lo contrario, la corte no podrá abordar muchas de las situaciones en las que su intervención es sumamente necesaria.

63. Una vez que una situación haya sido debidamente remitida al fiscal para que proceda a investigar, el fiscal debe estar facultado para negarse a realizar la investigación en determinados casos. Los Estados Unidos consideran que la norma relativa a la "inexistencia de fundamento" que se establece en el párrafo 1 del artículo 26 del proyecto de estatuto es demasiado restrictiva, ya que el fiscal

tendrá que decidir frecuentemente cómo utilizar los limitados recursos para investigar crímenes de carácter masivo. En esas circunstancias, el fiscal debe poder negarse a realizar investigaciones cuando en la denuncia no figuran, prima facie, fundamentos razonables que permitan actuar o cuando los actos de que se trate no sean de suficiente gravedad.

64. Otra de las importantes cuestiones que se plantean es determinar en qué medida pueden quedar sujetas a revisión judicial las investigaciones. Así, es preciso examinar en qué medida aumentan las posibilidades de que se desvirtúe la investigación cuando se envía una notificación a un sospechoso en la etapa de realización de las investigaciones. El hecho de dotar a los jueces de amplias facultades de investigación haría que aumentaran sus poderes y que disminuyera el efecto de equilibrio de un fiscal verdaderamente independiente. Las investigaciones podrían realizarse de manera más eficaz si fueran dirigidas por el fiscal, quien estaría sometido a una supervisión judicial limitada.

65. El orador tiene graves reservas respecto de las circunstancias en que pueden permitirse los juicios en rebeldía. Por una parte, existen alternativas para celebrar el juicio en ausencia del acusado en los casos en que éste no goza de buena salud, preocupa su seguridad o tiene un comportamiento perturbador; por otra parte, hay posibilidades de llevar a cabo algunas actuaciones sin que esté presente el acusado con objeto de hacerlas valer en un juicio posterior.

66. El orador está firmemente convencido de que las normas y los principios generales a que ha de atenerse la corte han de redactarse juntamente con su estatuto y aprobarse por los Estados partes antes de que se establezca la corte. La realización de investigaciones prejudiciales, la gestión de la información delicada, las normas sobre procedimiento y sobre práctica de la prueba y los conceptos generales del derecho penal influyen en gran medida en la capacidad de la corte de llevar a cabo un proceso imparcial y eficaz. Los expertos que forman parte del Comité Preparatorio, que representan a una diversidad de ordenamientos jurídicos nacionales, están especialmente dotados para preparar una propuesta amplia y de aceptación general, siempre que dispongan de tiempo suficiente para ello.

67. El Sr. WOUTERS (Bélica) dice que comparte plenamente las opiniones expresadas por Irlanda en la declaración que ha formulado en nombre de la Unión Europea. El orador destaca una resolución adoptada por el Parlamento Europeo el 19 de septiembre de 1996, en la que se invita a los Estados miembros de la Unión Europea a redoblar sus esfuerzos para establecer una corte penal internacional. La comunidad internacional ha de responder a la proliferación de graves violaciones de las normas y principios del derecho internacional dotándose de instrumentos imparciales e independientes para castigar a los autores de los crímenes más graves. Bélgica ha respaldado el establecimiento de los tribunales especiales para la ex Yugoslavia y Rwanda, a los que aporta recursos y personal. Bélgica promulgó recientemente disposiciones que le permiten cooperar con esos tribunales. A este respecto, ya ha expuesto en varias ocasiones las razones por las que apoya el pronto establecimiento de una corte penal internacional. Los elementos claves son: la prevención y la disuasión, la estabilidad y la universalidad, la convergencia de jurisprudencia y la necesidad de poner fin a la impunidad.

/...

68. Para que sea un órgano digno de confianza, la corte ha de tener, desde un principio, competencia ratione materiae respecto de determinados crímenes básicos. Además de los crímenes que figuran en la lista, Bélgica considera que debe incluirse el tráfico de seres humanos. La estructura institucional de la corte debe estar en consonancia con su labor jurisdiccional y ha de dotarse a la corte de los recursos financieros necesarios para que funcione debidamente. Debe recurrirse eficaz y equilibradamente al principio de la complementariedad al distribuir tareas y competencias entre la corte y los tribunales nacionales. El mecanismo de activación que se establece ha de permitir que la corte asuma plenamente las funciones que le ha conferido la comunidad internacional.

69. En su quincuagésimo primero período de sesiones, la Asamblea debe decidir renovar el mandato del Comité Preparatorio, teniendo debidamente en cuenta el calendario propuesto por su Presidente a la terminación del segundo período de sesiones del Comité. La observancia de ese calendario da muestra, además, de la voluntad de establecer prontamente la corte mediante la convocación de la conferencia diplomática en 1998. Si la Asamblea General decide pedir al Secretario General que establezca un fondo especial para que puedan participar los representantes de los países menos adelantados en la labor del Comité Preparatorio y en la conferencia diplomática, Bélgica estará dispuesta a contribuir a ese fondo, con miras a garantizar la participación universal en el proceso preparatorio y en el establecimiento de la corte.

70. El Sr. GOCO (Filipinas) dice que la corte penal internacional prevista cuenta con el precedente real del Estatuto y de los fallos del tribunal de Nuremberg. El concepto de crímenes que pueden entrañar una responsabilidad individual encuentra su razón de ser en dicho Estatuto. El orador, después de explicar cómo la persona pasó a ser sujeto de derecho internacional, con lo que se garantizó la protección de sus derechos fundamentales, dice que también pasó a asumir obligaciones y es responsable, de conformidad con el derecho internacional, de los crímenes que comete.

71. En una reunión especial del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano sobre el establecimiento de una corte penal internacional, presidida por el orador, se logró un consenso en relación con varias cuestiones. Así, los participantes estuvieron unánimemente de acuerdo en el establecimiento de una corte independiente e imparcial, al tiempo que algunas delegaciones consideraron que el artículo 42 del proyecto de estatuto, relativo al principio de non bis in idem, era inaceptable por considerar que atentaba contra la soberanía de los Estados. Además, los participantes estuvieron de acuerdo en que la competencia de la corte podía limitarse a los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional, particularmente el genocidio, las violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados y los crímenes de lesa humanidad. También cabría incluir el tráfico de drogas, el terrorismo y la piratería. No obstante, se destacó que el crimen de agresión y los crímenes de lesa humanidad no podían incluirse hasta que se ultimara el proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. Por otra parte, se observó que el artículo 23 del proyecto de estatuto, relativo a la intervención del Consejo de Seguridad, no propiciaba el desarrollo de un sistema de justicia penal internacional uniforme, no discriminatorio e imparcial, ya que podía empañar la objetividad y la independencia de la corte. No obstante, la corte debe respetar debidamente las resoluciones y decisiones del Consejo de Seguridad en interés del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Era

preciso que se aclarara el alcance del artículo 2, particularmente en relación con el papel previsto del Consejo de Seguridad en las actuaciones de la corte. Muchos participantes eran partidarios de que las normas de la corte en relación, entre otras cosas, con la realización de las investigaciones, el procedimiento y las normas de práctica de la prueba se redactasen juntamente con el estatuto. También era preciso aclarar la relación entre la investigación, la detención y la detención prejudicial por la corte y por un Estado parte que estuviese prestando asistencia judicial. Los participantes en la reunión del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano respaldaron la idea de que la corte debía ejercer su competencia de manera condicionada a la aceptación de los Estados interesados en cada caso. El consentimiento de los Estados de los que fueran respectivamente nacionales el acusado y la víctima se consideraba tan importante como el consentimiento del Estado de detención y del Estado en cuyo territorio se hubiera cometido el crimen. Por último, se expresó la opinión de que la corte y los Estados soberanos debían ser responsables de las medidas que tomaran o de su negativa a actuar. Con todo, el Estado que se negase a cooperar con la corte debería explicar sus razones para ello.

72. Refiriéndose a las opiniones de su propia delegación, el orador dice que está de acuerdo en que la corte se establezca en virtud de un tratado multilateral, por ser un órgano permanente con personalidad jurídica internacional. Además, está de acuerdo con el artículo 2 del proyecto de estatuto, relativo a la relación entre la corte y las Naciones Unidas, y sostiene que no debe disminuir la responsabilidad política primordial del Consejo de Seguridad de determinar la existencia de una agresión y de adoptar las medidas necesarias para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Lo mismo cabe decir respecto de la independencia de la corte a los efectos de determinar la responsabilidad de las personas que hayan cometido un acto de agresión. Los párrafos 1, 4 y 5 del artículo 26, el párrafo 1 del artículo 23 y el párrafo 3 del artículo 27 garantizan suficientemente la independencia de la corte en el desempeño de su función judicial en relación con el Consejo de Seguridad.

73. El orador acepta que la lista de crímenes básicos del artículo 20 del proyecto de estatuto se incluya dentro del ámbito inicial de competencia de la corte, si bien destaca la necesidad de incluir una disposición dotada de flexibilidad para poder ampliar ese ámbito en el futuro. Es asimismo aceptable la especificación del proyecto de estatuto en relación con los crímenes básicos definidos en las disposiciones de los tratados. Otros crímenes, como el expolio del patrimonio nacional por ex autoridades máximas, cuya inclusión había propuesto inicialmente Filipinas, podrían quedar también abarcados en el futuro.

74. En relación con el mecanismo de activación, el orador está de acuerdo con la norma según la cual únicamente los Estados partes o el Consejo de Seguridad pueden activar la puesta en marcha de la competencia de la corte. No obstante, debe quedar claro que los Estados partes deben actuar de conformidad con el concepto de parens patriae. Además, debe establecerse un paralelismo con los acuerdos regionales sobre derechos humanos, en los que se reconoce a las personas el carácter de "iniciadores", pero no se les da un acceso total.

75. El orador está de acuerdo con el hecho de que se establezca un sistema de dos etapas para que los Estados queden obligados por el estatuto; el mero hecho de la ratificación o la adhesión no significa la aceptación de la competencia de

/...

la corte respecto de crímenes concretos, salvo el de genocidio. Ha de formularse una declaración separada aceptando cada uno de los crímenes indicados en el artículo 20 del proyecto de estatuto antes de que una de las partes en él pueda someterse a la competencia de la corte. Dado que la corte simplemente complementará a los tribunales nacionales, en el artículo 42 no se le debe permitir que se exceda en sus funciones, particularmente porque cabe alegar que no se respeta el principio de non bis in idem. También debe abordarse la cuestión del alcance transnacional de la competencia. El orador exhorta a que se respalden los acuerdos de cooperación indicados en los artículos 51, 52, 53, 58 y 59, sin los cuales la corte resultará ineficaz.

76. Para que los juicios sean imparciales, debe existir un equilibrio entre las actuaciones eficaces y el respeto de los derechos de los acusados o de los sospechosos, con miras a aplicar las normas establecidas en los instrumentos pertinentes de derechos humanos. Además, las normas de funcionamiento de la corte deben ser adoptadas oficialmente por los Estados partes antes de que puedan aplicarse con objeto de lograr el máximo grado de justicia, de integridad y de respeto de las garantías procesales. El orador destaca los derechos del sospechoso o del acusado a guardar silencio y a estar asistido por un letrado, a menos que se renuncie a esos derechos por escrito en presencia de un abogado, así como el principio de la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas en violación de los derechos del sospechoso o acusado. El artículo 49 del proyecto de estatuto, relativo al procedimiento de apelación, debe revisarse, ya que cabe invocar el principio de non bis in idem. Debe aclararse el significado de la palabra "revisión" en la parte 6 del proyecto de estatuto, ya que no debe referirse a errores en los fallos, a los cuales puede ponerse remedio mediante la apelación. Por otra parte, el orador está de acuerdo en que se establezca un programa de protección de los testigos, que debe incluir asistencia social, económica y médica. Después de observar que, con arreglo al proyecto de estatuto, no cabe imponer la pena de muerte, el orador duda de que los países que imponen esa pena a los autores de determinados delitos estén dispuestos a renunciar o ceder su competencia primaria de procesar a quienes hayan cometido esos delitos en su territorio. Por lo demás, sería preferible que la corte se financiase mediante contribuciones de los Estados partes, sistema éste que pondrá de manifiesto su respaldo a la corte y evitará la necesidad de tener que efectuar nuevos pagos a las Naciones Unidas.

77. Ha llegado el momento de concluir la labor sobre los instrumentos relativos al establecimiento de la corte. Otros instrumentos internacionales que también parecían enfrentar obstáculos insuperables están actualmente aplicándose. Existe la determinación de concluir la labor, por lo que la corte podrá ser pronto una realidad; su establecimiento constituirá un importante logro en la esfera del derecho internacional.

78. El Sr. GALICKI (Polonia) dice que su país es especialmente consciente de la necesidad de proteger a la comunidad internacional frente a posibles repeticiones de los crímenes y atrocidades cometidos durante la segunda guerra mundial. La historia de Polonia, junto con los nuevos peligros que han surgido en las postrimerías del siglo XX, han convencido a su Gobierno de la necesidad de establecer una corte penal permanente que constituya un órgano fuerte, eficaz y dotado de suficiente autoridad por los Estados para desempeñar sus funciones.

79. El proyecto de estatuto de una corte penal internacional aprobado por la CDI es útil como base para la futura labor del Comité Preparatorio al respecto. La delegación de Polonia hace suyas las conclusiones del Comité que figuran en los párrafos 368 a 370 de su informe (A/51/22, vol. I), en los que se establece el marco para la preparación de una resolución de consenso sobre el tema del programa. La etapa siguiente de las negociaciones del Comité Preparatorio debe dedicarse a la redacción del texto refundido de una convención de una corte penal internacional que se presentará a la conferencia de plenipotenciarios. El Gobierno de Polonia considera que el Comité Preparatorio debe estar en condiciones de concluir su labor sobre el proyecto de convención en 1997, con objeto de que pueda convocarse la conferencia en 1998. La Asamblea General debe decidir sobre el calendario y la duración de la conferencia en el período de sesiones en curso.

80. La delegación de Polonia, que se suma plenamente a las opiniones expresadas en una sesión anterior por el representante de Irlanda en nombre de la Unión Europea, considera que la corte, pese a su estrecha vinculación a las Naciones Unidas, debe ser una institución internacional independiente y establecida en virtud de un tratado multilateral. Además, es de destacar la importancia del principio de la complementariedad. Debe quedar claro que el papel de una corte penal internacional no es sustituir a los sistemas judiciales nacionales y a las jurisdicciones nacionales, sino complementarlos en la medida necesaria.

81. El orador está de acuerdo en que la competencia de la corte respecto de los crímenes básicos de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra debe ser intrínseca y obligatoria, aunque no exclusiva. Ese enfoque, que cada vez caracteriza más a la práctica internacional contemporánea, significa que, cuando un Estado concreto acepte el estatuto de la corte y pase a ser parte en la convención por la que se establezca, no será necesario que el Estado manifieste nuevamente su consentimiento respecto de la competencia de la corte.

82. Además, la competencia de la corte debe limitarse, por lo menos en la etapa inicial, a los crímenes internacionales más graves. El hecho de restringir el alcance de la competencia de la corte puede facilitar las ratificaciones del estatuto de la corte, las adhesiones a él y su entrada en vigor. En cualquier caso, los crímenes que entren dentro de la competencia de la corte deben definirse con precisión en el estatuto.

83. El orador considera asimismo importante que los crímenes definidos en las disposiciones de los tratados queden incluidos dentro de la competencia de la corte. Dado que ese tipo de crímenes cada vez aumenta más, tal vez sea conveniente incluir un mecanismo de revisión en el proyecto de estatuto con objeto de que los Estados partes puedan complementar la lista de crímenes definidos en tratados.

84. Es preciso analizar detenidamente la inclusión del crimen de agresión dentro de la competencia intrínseca de la corte. El orador, aunque no se opone a su inclusión, comparte la opinión de que aún no se ha logrado una definición jurídica satisfactoria de la agresión. Además, es difícil establecer una distinción clara entre los actos de agresión de los Estados y de las personas. La propuesta de sustituir el término "agresión" por la expresión "guerra de agresión" en el estatuto de la corte merece ser examinada con detenimiento.

85. No debe soslayarse el papel excepcional que desempeña el Consejo de Seguridad a los efectos de determinar la existencia de un acto de agresión. Sin embargo, en la práctica el Consejo sólo lo ha determinado en escaso número de ocasiones, referidas únicamente a actos de Estados o de partes en un conflicto, pero no de personas. A fin de resolver esa cuestión, debe hacerse todo lo posible para que no existan interferencias entre las esferas de competencia del Consejo de Seguridad y de la corte.

86. Por lo que respecta al mecanismo de activación, debe facultarse al Consejo de Seguridad para que remita un "asunto" a la corte, pero no un caso. Además, el fiscal debe poder iniciar investigaciones de oficio.

87. El estatuto debe contener disposiciones sobre los principios generales del derecho penal, particularmente los de nullum crimen sine lege y nulla poena sine lege. Junto con el principio de la no retroactividad, esas normas deben constituir una base fundamental para que la corte funcione de manera objetiva y eficaz.

88. En lo concerniente a las penas, el Gobierno de Polonia considera sumamente difícil apoyar las propuestas de incluir la pena de muerte en el estatuto de la corte, ya que Polonia ha dejado en suspenso la imposición de la pena capital.

89. El orador considera que la futura relación entre la corte penal internacional y los tribunales nacionales constituirá un complejo proceso de cooperación jurídica y práctica. A este respecto, está de acuerdo en que el estatuto de la corte debe imponer a los Estados partes la obligación de cooperar con la corte siempre que sea necesario y viable.

90. Por lo demás, el proyecto de estatuto debe ser aceptable para el mayor número posible de Estados cuando llegue el momento de la convocación de la conferencia diplomática. Paralelamente, los intereses legítimos de todos los Estados, incluidos los que aún tienen reservas y dudas, deben tener cabida en el texto refundido del estatuto.

91. El Sr. GREXA (Eslovaquia) reafirma el firme apoyo de su delegación al establecimiento de una corte penal internacional y dice que se suma plenamente a la declaración formulada por el representante de Irlanda en nombre de la Unión Europea. El virtual consenso respecto del establecimiento de la corte es motivo de optimismo. Eslovaquia ha puesto de manifiesto su actitud responsable en relación con la cuestión ratificando prontamente la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado. Además, Eslovaquia considera que los crímenes más graves cometidos contra ese personal deben entrar dentro de la competencia de la corte.

92. A pesar de los importantes progresos realizados hasta el momento por el Comité Preparatorio, el orador considera que sería más realista celebrar en 1998 la conferencia diplomática que se propone y organizar los trabajos del Comité Preparatorio con miras a que estuviesen finalizados en la primavera de ese mismo año, haciendo hincapié en la participación del mayor número posible de Estados. El Comité Preparatorio es también partidario de esa solución.

93. El orador lamenta que el crimen de agresión pueda quedar excluido de la competencia de la corte. Aunque reconoce que los obstáculos a su inclusión son

más políticos que jurídicos, el orador considera que la tarea asignada al Comité Preparatorio y a la propia corte quedará incompleta si ese crimen básico no queda incluido en el estatuto de la corte. La delicada cuestión de definir la agresión no es imposible de resolver y puede abordarse de nuevo en una fecha más próxima a la celebración de la conferencia propuesta. Otra cuestión importante es la universalidad de la corte, que está vinculada estrechamente a su eficacia. Varias delegaciones han destacado acertadamente a este respecto que el proceso que está teniendo lugar en el marco del Comité Preparatorio sigue siendo inaccesible a la mayoría de los países. No obstante, la universalidad no debe basarse únicamente en el número de países que están dispuestos a ser partes en el estatuto de la corte. Por el contrario, depende en buena medida de que exista el más amplio grado posible de aceptación de los principios en que se basará la corte, ya que, de lo contrario, ésta podría resultar impotente.

94. Una tercera cuestión que suscita preocupación es la independencia de la corte. El orador está de acuerdo en que es preferible que la corte se establezca en virtud de un tratado multilateral y en que debe mantener una estrecha relación con las Naciones Unidas, basada en la igualdad. Sin embargo, no parece probable que la corte penal internacional vaya a constituir una excepción a la norma de que ningún tribunal disfruta de total independencia. A juicio de la delegación de Eslovaquia, la falta de recursos financieros constituye la amenaza más grave para la independencia y la imparcialidad de la corte. Aunque, por sí mismas, las consideraciones financieras no deben ser factores determinantes de la composición de la corte ni del cumplimiento de su mandato, es fundamental que la corte se organice con arreglo a criterios de simplicidad y economía. El Gobierno de Eslovaquia tiene previsto continuar participando activamente en los trabajos con miras a que la corte llegue a ser una realidad.

95. El Sr. CHEN Shigiu (China) dice que, aunque su delegación acoge favorablemente los progresos considerables realizados por el Comité Preparatorio a los efectos de la preparación del proyecto de estatuto de una corte penal internacional, persisten graves diferencias de opinión en relación con todas las cuestiones principales, incluido el alcance de la competencia de la corte, la definición de los crímenes, el principio de la complementariedad, el mecanismo de activación y el papel del Consejo de Seguridad. A pesar de que las reuniones del Comité Preparatorio han sido útiles para que los Estados conociesen sus respectivas posiciones, el Comité no ha podido preparar, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 50/46 de la Asamblea General, un texto refundido de aceptación general de una convención sobre el establecimiento de una corte penal internacional.

96. En lo concerniente al principio de la complementariedad, el Gobierno de China ha mantenido siempre que los Estados tienen la responsabilidad primordial de prevenir y reprimir los crímenes internacionales. En la mayoría de los casos, el ordenamiento jurisdiccional del Estado desempeña un papel rector insustituible. Una corte penal internacional puede funcionar únicamente como órgano auxiliar de los tribunales nacionales. Con objeto de impedir o reducir al mínimo la posibilidad de que se produzcan innecesarios conflictos de competencia entre la corte penal internacional y los tribunales nacionales, en la futura convención deben delimitarse claramente sus respectivos ámbitos de competencia.

97. De conformidad con el principio de la soberanía de los Estados, el Gobierno de China sostiene sistemáticamente que la competencia de la corte debe basarse en el consentimiento de los Estados. En el proyecto de estatuto aprobado por la CDI se establece que la corte tendrá competencia intrínseca (es decir, no sujeta al consentimiento de los Estados) respecto del crimen de genocidio. El orador se opone a ese planteamiento y no es partidario de que se amplíe la denominada competencia intrínseca a otros crímenes internacionales.

98. La delegación de China considera que la Asamblea General debe adoptar una decisión en el período de sesiones en curso encomendando al Comité Preparatorio que emprenda negociaciones a los efectos de preparar el texto refundido de una convención. Esa decisión impondría una pesada carga de trabajo al Comité Preparatorio, habida cuenta de que aún no existe un texto que pueda servir de base para la celebración de negociaciones. La compilación de propuestas recogidas por el Comité Preparatorio (A/51/22, vol. II) dista mucho de constituir ese documento, ya que será necesario que los Estados formulen nuevas observaciones y propuestas antes de que pueda lograrse un consenso. Aunque la delegación de China comprende el ferviente deseo de algunos países de que se establezca prontamente una corte penal internacional y no se opone a la convocación de una conferencia de plenipotenciarios lo antes posible, debe recordarse que la convocación de la conferencia no es el objetivo final y que el apresuramiento no conduce a nada. La decisión que se adopte sobre el asunto debe basarse en los progresos que se realicen en la etapa siguiente de los trabajos del Comité Preparatorio. Es importante contar con una evaluación realista de las numerosas y complejas cuestiones que siguen sin resolverse y del tiempo que se precisa para ello. A juicio del orador, la convocación de la conferencia exige previamente que esté totalmente preparado el texto de un proyecto de convención y que hayan concluido las negociaciones sobre cuestiones jurídicas y otras cuestiones de carácter técnico.

99. Dado que la universalidad es una condición sine qua non para lograr que la corte penal internacional tenga éxito y eficacia, la comunidad internacional debe esforzarse por lograr el mayor grado posible de participación en los trabajos del Comité Preparatorio, particularmente por lo que respecta a los países en desarrollo. Con objeto de facilitar esa participación, deben utilizarse diversos recursos, incluidos los fondos de las Naciones Unidas y contribuciones voluntarias de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y los donantes privados. Además, con miras a la organización de sus futuras reuniones, el Comité Preparatorio debe asegurarse de que se prestarán servicios de interpretación y traducción a los expertos y delegados, de que no se celebrarán reuniones simultáneas, de que las consultas que tengan lugar serán suficientemente transparentes y de que las decisiones se adoptarán por consenso.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

100. La Sra. FLORES (México), después de informar sobre los resultados de las consultas celebradas entre los miembros de la Sexta Comisión para determinar el foro en que ésta debe examinar la cuestión de la aplicación de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas en relación con la asistencia a terceros Estados afectados por la aplicación de sanciones de conformidad con el Capítulo VII de la Carta (tema 150 del programa), dice que, a pesar de los esfuerzos que ha realizado para ponerse en contacto con el mayor número posible de

/...

delegaciones, no ha podido consultar con todas ellas. Además, a causa de la diversidad de opiniones expresadas durante las consultas, por el momento no resulta posible formular recomendaciones concretas respecto a la elección del foro. Se han examinado dos posibilidades: la constitución de un grupo de trabajo y la celebración de consultas oficiosas. Ambas posibilidades cuentan con el respaldo de varios grupos de Estados, en tanto que otros no han expresado ninguna preferencia. A juicio de una delegación, no es conveniente utilizar el tiempo y los recursos limitados de que se dispone para examinar el tema. Otras delegaciones han expresado preocupaciones en relación con la disponibilidad de servicios de conferencias en futuras reuniones.

Se levanta la sesión a las 13.20 horas.